

Primer mes de Kast: el inicio, el Mepco y el regreso de la política

Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, analiza en detalle las turbulentas semanas iniciales de la nueva administración desde la mirada de los aciertos, errores, la contingencia y los desafíos.

Por Rodrigo Arellano

Cuando José Antonio Kast cruzó las puertas de La Moneda el 11 de marzo, lo hizo con el mandato más sólido que la derecha chilena haya conseguido. Más del 58% en la segunda vuelta de diciembre no solo fue una tremenda victoria electoral, fue una delegación de confianza de una ciudadanía que llegó al límite con la inseguridad, el deterioro económico y cuatro años de un gobierno que nunca terminó de entender las urgencias del país que gobernaba. El discurso de la necesidad de un gobierno de emergencia había calado profundamente en la ciudadanía. La pregunta desde el minuto uno era cómo se administraría ese capital. La respuesta llegó antes de lo esperado.

Para entender el primer mes del presidente Kast parece razonable distinguir tres momentos: Inicio, ajuste fiscal y las consecuencias políticas que hemos visto y que se verán luego del ataque que sufrió la ministra de Ciencia y Tecnología.



I. EL INICIO: SIETE DECRETOS Y UNA ZANJA

José Antonio Kast no esperó al día siguiente. Antes de que los aplausos del cambio de mando se apagaran en Valparaíso, ya había dado instrucciones al comandante en jefe del Ejército para colaborar en la construcción de barreras físicas en la frontera norte.

En la noche del 11 de marzo firmó siete decretos que trazaron con nitidez las prioridades del nuevo Ejecutivo. El más simbólico fue la Política Nacional de Cierre Fronterizo, que ponía en marcha el Plan Escudo Fronterizo: zanjas de tres metros de profundidad, muros de hasta cinco metros de altura, drones de operación continua y torres de vigilancia a lo largo de la frontera norte. Las zonas prioritarias eran Colchane y Chacalluta. Otros decretos designaron al vicealmirante en

retiro Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte, instruyeron la auditoría total del Estado e instruyeron la reactivación de USD 16.000 millones en inversiones paralizadas por la "permisología".

El martes 16 de marzo, cinco días después de asumir, Kast viajó al norte a monitorear las obras. Las retroexcavadoras ya trabajaban. En un país donde la desconfianza hacia las promesas políticas se había vuelto costumbre, esa imagen valía más que cualquier discurso.

La semana dejó más resultados concretos: 20 urgencias legislativas despachadas en un solo acto, la Reforma a Gendamería convertida en ley y el borrador del Plan de Reconstrucción Nacional presentado ante familias damnificadas por los megaincendios de enero en Lirquén. Se retiraron además 43 decretos de la administración



RODRIGO ARELLANO, VICEDECANO DE LA FACULTAD DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO.

anterior para revisión técnica, en lo que el oficialismo presentó como una medida de higiene administrativa y la oposición leyó como un gesto refundacional.

Las encuestas acompañaban: Cadem ubicó la aprobación presidencial en torno al 57%. El Panel Ciudadano UDD mostró que seis de los siete decretos del primer día superaban el 75% de respaldo ciudadano. El 89% apoyaba el refuerzo fronterizo con militares y tecnología. El 88%, la creación de una autoridad especial para el control migratorio. El único punto que dividía era el indulto a uniformados condenados durante el estallido social, que generaba apoyo mayoritario, pero no el consenso de las otras medidas.

El Plan Escudo Fronterizo era al mismo tiempo política pública y declaración de principios. A los chilenos, la señal

de que esta vez sí se cumplía lo prometido. Y a la región, la demostración de que Chile sería un Estado de frontera efectiva, no de papel.

II. AJUSTE DEL MEPCO: LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

El lunes 23 de marzo cambió el rumbo de la sintonía con el gobierno. Esa noche el ministro de Hacienda anunció el cambio en el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco). La medida extendía de dos a cuatro semanas el período de cálculo del precio de paridad de importación. A partir del 26 de marzo, el efecto en surtidor fue inmediato: alzas de más de 300 pesos por litro en menos de una semana en la gasolina y más de 500 en el diésel.

La decisión no fue un error ni un accidente. El ministro Jorge Quiroz eligió el camino más exigente: eliminar de una vez el

subsidio implícito que el Mepco representaba para las arcas fiscales, en lugar de distribuir el ajuste en cuotas que habrían llegado al mismo resultado con un costo acumulado mayor para el erario fiscal. En un escenario internacional marcado por la guerra en el Medio Oriente, la volatilidad energética y la incertidumbre de los mercados del petróleo, postergar el ajuste equivalía a apostar con plata ajena. Quiroz no quiso hacer esa apuesta. Su razonamiento lo expuso sin rodeos: "El dinero no aparece de la nada. Se genera cuando hay trabajo, cuando hay inversión y cuando la economía crece". Y fue más lejos: "No vamos a comprar popularidad endeudándonos para después dejar al país en una situación crítica". Era la filosofía del programa económico aplicada sin filtros en el primer momento en que dolía de verdad.

(viene de la página anterior)

Era un decisión que se esperaba. El propio ministro había anunciado, incluso antes de asumir, que la situación de fragilidad fiscal heredada del gobierno anterior obligaría a realizar un recorte del 3% en todos los ministerios del gobierno, aunque el dogmatismo puro original ha comenzado a cambiar. La influencia de los ministros más políticos (Alvarado y García Ruminot) ha logrado matizar en parte este camino con medidas paliativas en el caso de los combustibles, y la revisión de la aplicabilidad pareja de la reducción de su presupuesto a todos los ministerios. Luego de críticas por parte de la oposición, el ministerio de Seguridad no tendrá que aplicar este recorte y se espera que otras carteras sociales, como Salud o Educación, se sumen a esta excepción.

Las encuestas reflejaron el costo político. La aprobación cayó del 57% al 43% en dos semanas, acumulando 14 puntos de caída. El Panel Ciudadano UDD registró 42% de aprobación y 48% de rechazo. La caída se concentró en mujeres, sectores medios y la Región Metropolitana, los votantes que en diciembre habían apoyado a Kast por hartazgo con el gobierno anterior, no por convicción ideológica. Kast respaldó a su ministro sin fisuras: "No gobernaré en base a la popularidad".

Lo que el episodio dejó en evidencia no fue falta de convicción, sino un problema de coordinación comunicacional: la narrativa del "Estado en quiebra" que circuló en piezas gráficas oficiales generó una controversia que el propio Quiroz tuvo que despejar aclarando que lo correcto era hablar de "deterioro fiscal". Fue ruido innecesario sobre una decisión que técnicamente debía sostenerse sola.

El primer mes dejó tres flancos. El primero de ellos, el llamado a retiro por parte del director de la PDI, Eduardo Cerna, a la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña (tercera antigüedad de esa institución), solo dos días después que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, le enviara un oficio reservado para que explicara algunas de las decisiones administrativas tomadas por Peña. Esta salida ha sido leída como una "pasada de cuentas" por traslados ocurridos cuando Steinert era fiscal regional en Tarapacá. El documento llegó con errores protocolares y rozó los límites legales al pedir antecedentes de una causa penal en curso. La Contraloría abrió investigación

"El inicio fue lo que el electorado que votó por Kast quería ver: velocidad, cumplimiento de promesas, un Estado que hace lo que dice".

y el director de la PDI tuvo que comparecer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Aún persisten dudas sobre quién tomó realmente la decisión.

El segundo flanco se produjo con el despido de Priscilla Carrasco, directora del SernamEG, en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo. La decisión, que fue defendida por el propio Presidente Kast, desató fuego amigo desde algunos actores de Chile Vamos -Paulina Núñez, Karla Rubilar y Evelyn Matthei, entre las más duras- y dejó al gobierno con imagen de dureza sin empatía, justo cuando más necesitaba mostrar lo contrario, y con varios cuestionamientos a ministra y subsecretaria de la Mujer.

Por último, la instalación de las autoridades regionales ha sido otro flanco abierto del primer mes. Los nombramientos de seremis han avanzado a paso lento y con tropiezos que el gobierno no supo evitar. En el Biobío, Alexander Nanjari fue anunciado como seremi de Educación con despliegue en redes sociales, pero en menos de 24 horas su nombramiento no se materializó, tras viralizarse tuits suyos con comentarios inapropiados. El patrón se repitió en otras regiones: en Los Ríos cayó el seremi de Obras Públicas por irregularidades en su pasado en el fútbol; en Los Lagos se revocó el de Energía porque el designado no cumplía el requisito académico mínimo. La secuencia reveló una falla de origen: los filtros previos al anuncio público no funcionaron, y el gobierno pagó el costo de correcciones hechas a la vista de todos.

III. LEY DE RECONSTRUCCIÓN Y EL CASO LINCOLAO

Con la agenda económica en un momento político exigente, el gobierno preparó su principal carta legislativa. El Plan de Reconstrucción Nacional agrupaba más de 40 medidas: \$400.000 millones para reconstrucción habitacional, exención transitoria del IVA a la vivienda, rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, límites etarios a la gratuidad universitaria y agilización de la permisología. La



EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, TOMÓ LA DECISIÓN MÁS POLÉMICA DURANTE LA INSTALACIÓN DEL GOBIERNO DE KAST.

oposición lo bautizó "ley tuiti-fruti". Desde el FA y la DC cuestionaron que se mezclaran reformas estructurales con la reconstrucción post-catástrofe. El senador Iván Flores (DC) lo resumió: "No hagamos trampitas".

El ingreso al Congreso, previsto para la semana que termina, fue postergado. Interior y la Segpres abogaron por reforzar la coordinación política antes de dar el paso. Era una señal de que el gobierno había aprendido algo del mes anterior. La política estaba superando a la dimensión técnica.

Durante la semana que está terminando, mientras se afinaban los últimos detalles del proyecto, un incidente en Valdivia cambió el eje del debate. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, había viajado a la Universidad Austral para la inauguración del año académico. Cerca de cien estudiantes coordinados de antemano se apostaron en el exterior del Aula Magna. Lincolao debió permanecer adentro casi tres horas. Al salir, fue insultada, empujada y rociada con líquido. Esa noche, el presidente Kast recibió a la ministra en La Moneda junto a siete ministras de su gabinete y la Primera Dama. Abandonó el tono presidencial habitual, citó textualmente el insulto que una manifestante le había gritado a Lincolao y lo ca-

lificó de inaceptable. Prometió consecuencias. La ministra de Seguridad interpuso esa misma noche una querrela criminal por atentado a la autoridad.

La condena fue transversal. Kast cerró cualquier posibilidad de relativización: "Hay personas que dicen que respaldan, pero después le ponen una coma y un pero". Lincolao salió del episodio con capital político propio: "No tengo miedo. Esto no va a detenernos para seguir trabajando por todos los ciudadanos". El gobierno recuperaba su eje más sólido: orden y autoridad institucional. Y la izquierda quedaba en una posición incómoda, obligada a condenar la violencia sin poder contextualizar el conflicto de fondo con el mundo universitario. Este incidente se ha sumado a una serie de conflictos de violencia que han surgido en distintos colegios a lo largo del país, que tuvo su momento más dramático con el asesinato de la inspectora Victoria Reyes en el patio del Instituto Obispo Silva Lezaeta, de la ciudad de Calama. El gobierno ha impulsado una serie de proyectos de ley que buscan aumentar el control y sanción de este tipo de conductas. El ataque a la ministra puede verse como una oportunidad para tramitar con rapidez estos proyectos, que habían encontrado un grado de resis-

tencia en la oposición.

BALANCE

El inicio fue lo que el electorado que votó por Kast quería ver: velocidad, cumplimiento de promesas, un Estado que hace lo que dice. El ajuste del Mepco fue políticamente costoso, pero responde a una lógica que Quiroz ha defendido con consistencia: Chile no puede absorber los vaivenes del precio internacional del petróleo con deuda pública, menos en un contexto de guerra e incertidumbre global. Postergar el ajuste habría llegado al mismo resultado con mayor costo fiscal acumulado. Que esa decisión haya bajado las encuestas no la hace incorrecta. La hace difícil, que no es lo mismo.

La derecha chilena tiene una deuda histórica con la coherencia: llega al gobierno con grandes programas, pierde el rumbo ante la primera tormenta y termina administrando lo que puede en vez de transformar lo que prometió. Kast llegó con la convicción de romper ese patrón. El primer mes mostró que tiene el carácter para intentarlo. También mostró, con igual claridad, que el espacio para el error comunicacional es estrecho cuando la ciudadanía paga las decisiones en el surtidor de la bencina.

El episodio Lincolao devolvió al gobierno la iniciativa po-

lítica en el momento más necesario. Y el ingreso de la Ley de Reconstrucción al Congreso, postergado para la semana siguiente, será el verdadero test: un proyecto con flancos reales, que deberá abrirse paso sin mayoría parlamentaria y con una oposición que ya mostró sus cartas. La rebaja del impuesto corporativo y los límites a la gratuidad universitaria serán los campos de batalla más ásporos.

El primer mes de Kast describe un gobierno que sabe lo que quiere, que tiene el carácter para defenderlo y que está aprendiendo, a veces a golpes, que gobernar no es solo tener razón. Es buscar más diálogo y saber comunicar correctamente.

Uno de los desafíos pendientes es que los ministros sectoriales asuman más presencia pública. El primer mes lo monopolizaron el Presidente, Quiroz y una Mara Sedini que no tuvo su mejor marzo. Iván Poduje en Vivienda tiene autoridad técnica y llegada ciudadana para hablar de reconstrucción y déficit habitacional. María Jesús Wulf en Desarrollo Social puede humanizar una agenda que en varias semanas sonó fría. Cuando el gabinete distribuye el protagonismo entre sus figuras más sólidas, la presión sobre La Moneda baja y los errores de vocería dejan de convertirse en crisis. **CS**